

**ACUERDO
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
RECÍPROCAS DE INVERSIONES
ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y
LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS**



PREÁMBULO

La República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos (en adelante denominados "las Partes"),

A fin de promover una mayor cooperación económica en beneficio mutuo de ambas Partes;

Destacando la necesidad de que toda inversión extranjera sea compatible con la promoción del desarrollo económico de ambas Partes, así como la protección del medio ambiente;

Resultando, asimismo, que resulta indispensable que toda inversión se realice y efectivice de conformidad con el derecho internacional y con las leyes y reglamentaciones de la Parte en cuyo territorio se realiza la inversión; y

Con el propósito de alentar el desarrollo sustentable de las Partes y promover y proteger las inversiones realizadas por los inversores de cada Parte en el territorio de la otra Parte;

Han acordado lo siguiente:

PARTE I DISPOSICIONES SUSTANCIALES

Artículo 1: Definiciones

A los fines del presente Acuerdo:

El término "CIADI" se refiere al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Convenio del CIADI;

El término "Convenio del CIADI" se refiere al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, firmado en Washington el 18 de marzo de 1965;

El término "inversión" significa todo activo que posea o controle un inversor de una Parte, de forma directa o indirecta, establecido en el territorio de la otra Parte, de

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



conformidad con sus leyes y reglamentaciones y con características como: asunción de riesgo empresario, introducción de capital u otros recursos en el territorio de la Parte receptora de la inversión y contribución al desarrollo económico de dicha Parte;

El término "inversión" incluye, en particular:

- (a) una empresa;
- (b) acciones, títulos valores y otras formas de participación en una empresa;
- (c) créditos y otros instrumentos financieros destinados a la realización de inversiones productivas;
- (d) derechos de propiedad intelectual en los términos del Artículo 15;
- (e) contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión y de participación en los ingresos;
- (f) licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares otorgados de conformidad con las leyes y reglamentaciones de cada Parte.¹
- (g) otros bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y derechos de propiedad relacionados, tales como locaciones, hipotecas, gravámenes y prendas.

El término "inversión" no incluye:

- (a) deuda soberana de una Parte o deuda de una empresa pública, la cual se encontrará sujeta a la legislación aplicable, jurisdicción y términos y condiciones establecidos en cada instrumento correspondiente;
- (b) títulos de deuda como bonos, debentures y cualquier otro tipo de instrumento financiero;
- (c) reclamos monetarios relacionados exclusivamente con contratos comerciales por la compra de bienes y servicios;
- (d) resoluciones judiciales o administrativas;
- (e) en el caso de la República Argentina, concesiones para la búsqueda, exploración, extracción o explotación de recursos naturales y los recursos naturales, los cuales se encontrarán sujetos a las leyes y reglamentaciones de la República Argentina;
- (f) en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, concesiones para la búsqueda, exploración, extracción o explotación de recursos naturales y los recursos naturales, los cuales no se verán alcanzados por el presente Acuerdo.

La expresión "inversor de una Parte" designa a toda persona física o jurídica que sea nacional de una de las Partes de conformidad con lo establecido en el ordenamiento

¹ Que un tipo de licencia, autorización, permiso o instrumento similar (incluidas las concesiones, en la medida en que sean de la misma naturaleza que este tipo de instrumento) tenga las características de una inversión dependerá de factores como la naturaleza y el alcance de los derechos del titular, de conformidad con la legislación de la Parte. Las licencias, autorizaciones, permisos o instrumentos similares que no posean las características de una inversión incluyen aquellos que no den lugar a derechos protegidos en virtud de la legislación interna correspondiente.



[Handwritten signatures and initials]

jurídico de la Parte cuya nacionalidad se invoca y que realice una inversión en el territorio de la otra Parte.

La expresión "**inversor de un Estado no Parte**" se refiere, en relación con una Parte, a un inversor que realice una inversión en el territorio de dicha Parte pero que no sea inversor de ninguna de las Partes;

La expresión "**Convención de Nueva York**" se refiere a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha el 10 de junio de 1958 en Nueva York;

La expresión "**Acuerdo TRIPS**" significa el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio;

La expresión "**nacional de una Parte**" significa:

- (a) las personas físicas que posean la nacionalidad efectiva de una de las Partes; y
- (b) las personas jurídicas establecidas en virtud de la legislación de una de las Partes, con su sede principal de los negocios en el territorio de dicha Parte.

"**Sede principal de sus negocios**" se refiere al lugar donde se encuentre la gerencia principal de la entidad y donde realice sus actividades económicas más significativas.

Para mayor certeza, se considerará que las personas con doble nacionalidad son solamente nacionales del Estado de su nacionalidad efectiva.

La expresión "**nacional de una Parte**" excluye:

- (a) personas físicas con residencia permanente en el territorio de la otra Parte, o que tengan su nacionalidad;
- (b) una persona jurídica constituida en virtud de la legislación de una de las Partes con sede principal de sus negocios dentro del territorio de dicha Parte y que sea controlada por nacionales de un tercer Estado o de la Parte receptora de la inversión;
- (c) una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación de dicha Parte y que no desarrolle la mayor parte de sus actividades económicas más significativas dentro del territorio de dicha Parte.

La expresión "**CPA**" se refiere a la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) con sede en La Haya y constituida mediante la Convención para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales del 29 de julio de 1899;

La expresión "**parte contendiente**" se refiere tanto a la parte demandante como a la demandada; y "**partes contendientes**" se refiere a la demandante y a la demandada;

La expresión "**moneda de libre uso**" se refiere al término "moneda de libre uso" según lo establecido por el Fondo Monetario Internacional en su Convenio Constitutivo.

La expresión "**territorio**" se refiere:

Con respecto a la REPÚBLICA ARGENTINA: al territorio sujeto a la soberanía de la República Argentina y la zona económica exclusiva y plataforma continental sobre la cual la República Argentina ejerce sus derechos de soberanía o jurisdicción de conformidad con sus disposiciones constitucionales, legales y el derecho internacional;

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures and initials]

Con respecto a los EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: al territorio de los Emiratos Árabes Unidos bajo la soberanía de estos, así como la zona fuera de sus aguas territoriales, el espacio aéreo y el marítimo sobre el cual los Emiratos Árabes Unidos ejerzan derechos de soberanía y jurisdicción respecto de cualquier actividad desarrollada en sus aguas, lecho marino y subsuelo en relación con la exploración o con fines de explotación de recursos naturales en virtud de sus leyes y del derecho internacional;

La expresión "CNUDMI" se refiere a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; y

La expresión "Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI" se refiere al reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Artículo 2: Ámbito de aplicación

1. El presente Acuerdo se aplicará solamente a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte en relación con:

- (a) los inversores de la otra Parte;
- (b) las inversiones existentes a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o adquiridas o ampliadas posteriormente;
- (c) toda acción, evento o situación que tenga lugar después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o que se encuentre directamente relacionado a eventos o acciones que tengan lugar luego de dicha fecha;

2. El presente Acuerdo no se aplicará:

- (a) al otorgamiento, la suspensión y la renovación de subsidios o donaciones;
- (b) a compras y contrataciones del gobierno.²

Artículo 3: Trato nacional

1. Cada Parte otorgará a los inversores de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversores en lo que se refiere a la administración, conducción, funcionamiento y disposición de las inversiones en su territorio.

2. Cada Parte otorgará a las inversiones un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones de sus propios inversores en su territorio en lo que se refiere a la administración, realización, funcionamiento y disposición de inversiones en su territorio.

² Las Partes consideran que el término "compras y contrataciones del gobierno" incluye tanto compras y contrataciones públicas como obras públicas.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures and initials]

3. Para mayor certeza, el trato otorgado en "circunstancias similares" conforme al presente Artículo dependerá de la totalidad de las circunstancias, entre ellas, la distinción entre inversiones o inversores sobre la base de objetivos legítimos de bienestar público.

4. En relación con el primer párrafo del presente, las Partes solo admitirán el ingreso de inversiones establecidas por los inversores de la otra Parte con sujeción a sus leyes y reglamentaciones aplicables.

Artículo 4: Trato de la nación más favorecida

1. Cada Parte otorgará a los inversores de la otra Parte un tratamiento no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversores de cualquier otro Estado en lo que se refiere a la administración, realización, funcionamiento y disposición de las inversiones en su territorio.

2. Cada Parte otorgará a las inversiones de la otra Parte un tratamiento no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones de los inversores de cualquier otro Estado en lo que se refiere a su administración, conducción, funcionamiento y disposición.

3. Para mayor certeza, el tratamiento otorgado en "circunstancias similares" conforme este Artículo dependerá de la totalidad de las circunstancias, incluyendo la distinción entre inversores o inversión sobre la base de objetivos legítimos de bienestar público.

4. Para mayor certeza, las disposiciones del presente Artículo no resultarán aplicables para incorporar disposiciones sustanciales sobre tratamiento que no se encuentren contenidas en el presente Acuerdo, ni para excluir derechos o facultades otorgados a la Parte receptora en el presente Acuerdo.

5. Para mayor certeza, el tratamiento mencionado en el presente Artículo no se aplicará a materias procesales o jurisdiccionales.

6. Las disposiciones del presente Artículo no resultarán aplicables para invocar un tratamiento más favorable otorgado por cualquiera de las Partes en virtud de:

- (a) acuerdos comerciales o impositivos;
- (b) zonas de libre comercio;
- (c) uniones aduaneras;
- (d) mercados comunes;
- (e) uniones económicas u otros mecanismos de integración;

a los que la Parte receptora pertenezca o de los cuales pase a ser parte.

7. Las disposiciones del presente Artículo no resultarán aplicables para invocar un tratamiento más favorable otorgado por cualquiera de las Partes en virtud de tratados bilaterales de inversión u otros acuerdos que contengan disposiciones relativas a las inversiones firmados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MFE



[Handwritten signatures]

Artículo 5: Estándar mínimo de trato

1. Cada Parte otorgará a las inversiones un trato acorde con el estándar mínimo de trato a los extranjeros del derecho internacional consuetudinario, incluyendo el trato justo y equitativo y la protección y seguridad plenas.
2. Para mayor certeza, los conceptos "trato justo y equitativo" y "protección y seguridad plenas" del párrafo 1 no requerirán un trato adicional o más allá del exigido por el estándar mínimo de trato a los extranjeros del derecho internacional consuetudinario:
 - (a) el "trato justo y equitativo" incluye, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la obligación de las Partes de no incurrir en denegación de justicia en procedimientos penales, civiles o administrativos, de conformidad con el principio del debido proceso contemplado en los principales sistemas jurídicos del mundo y en la medida en que la conducta de las Partes resulte perjudicial para el inversor; y
 - (b) la "protección y seguridad plenas" requieren que cada Parte ofrezca el nivel de protección física requerido por el derecho internacional consuetudinario, y que no exija un tratamiento adicional o que exceda el trato mínimo a extranjeros requerido por el derecho internacional consuetudinario.
3. La determinación de que se ha violado otra disposición de este Acuerdo no implica que se haya violado el presente Artículo.
4. No se considerará que violan el estándar mínimo de trato los actos legislativos o regulatorios no discriminatorios y no arbitrarios que adopte cualquiera de las Partes con el propósito de proteger objetivos de bienestar general tales como los de orden público, salud pública, seguridad pública, protección del medio ambiente y política económica o que confieran a un inversor de la otra Parte el mismo tratamiento que el conferido en circunstancias similares a sus propios inversores o a inversores de terceros Estados.

Artículo 6: Expropiación y compensación

1. Ninguna de las Partes expropiará o nacionalizará inversiones en su territorio, ya sea directa o indirectamente, a través de medidas equivalentes a la expropiación, salvo que sea:
 - (a) con fines públicos;
 - (b) de forma no discriminatoria;
 - (c) de acuerdo con el debido proceso legal;
 - (d) previo pago de compensación de conformidad con los párrafos 4, 5 y 6.
2. A los efectos del presente Artículo:
 - (a) expropiación directa se refiere a la transferencia formal de titularidad o derechos de propiedad;
 - (b) expropiación indirecta se refiere a cualquier acción o serie de acciones por parte de una Parte que equivalgan a la expropiación directa sin que medie transmisión formal de titularidad o derechos de propiedad.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures]

3. El Tribunal Arbitral determinará si un acto o una serie de actos de cualquiera de las Partes en un caso concreto constituye o no una expropiación indirecta sobre la base de una investigación de los hechos que considere:

- (a) si la acción o serie de acciones afecta sustancialmente una inversión de un inversor de la otra Parte realizada en el territorio de la Parte receptora, privando al inversor del control y la administración de dicha inversión;
- (b) el impacto económico del acto gubernamental; y
- (c) el objetivo y el contexto del acto gubernamental.

4. La compensación del párrafo 1(d) deberá:

- (a) pagarse sin demoras indebidas;
- (b) ser equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de realizada la expropiación (fecha de expropiación);
- (c) no reflejar ningún cambio de valor en virtud de la expropiación planificada e informada con anterioridad; y
- (d) ser completamente realizable y libremente transferible de conformidad con las disposiciones del Artículo 7 (Transferencias).

5. En caso de que el valor justo de mercado se exprese en una moneda de libre uso, la compensación abonada no será inferior al valor justo de mercado registrado en la fecha de la expropiación, más intereses a una tasa simple y comercialmente razonable para dicha moneda, los cuales se devengarán desde la fecha de expropiación hasta la fecha de pago.

6. En caso de que el valor justo de mercado se exprese en una moneda que no sea de libre uso, la compensación abonada, convertida a la moneda de pago al tipo de cambio vigente a la fecha de pago, no resultará inferior a:

- (a) el valor justo de mercado a la fecha de expropiación, convertido a una moneda de libre uso al tipo de cambio vigente a la fecha de pago, más
- (b) intereses a una tasa simple y comercialmente razonable para esa moneda de libre uso, devengados desde la fecha de expropiación hasta la fecha de pago.

7. Este artículo no se aplicará a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación con derechos de propiedad intelectual o la revocación, limitación o creación de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que dichos actos sean compatibles con el Acuerdo ADPIC.

8. No constituyen expropiación indirecta el acto o serie de actos legislativos o regulatorios no discriminatorios que son diseñados o aplicados por una de las Partes con el propósito de proteger objetivos de bienestar general tales como los de orden público, de salud pública, de seguridad pública, de protección del medio ambiente y de política económica.

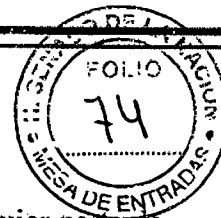
Artículo 7: Transferencias

1. Cada Parte, previo cumplimiento de los requisitos previstos en su legislación y sin demoras injustificadas, permitirá que los inversores de la otra Parte realicen, en una moneda de libre convertibilidad, transferencias de:

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures]



- (a) aportes de capital;
- (b) ganancias, dividendos y capitales obtenidos de la venta de toda o cualquier parte de la inversión o de su liquidación total o parcial;
- (c) intereses, pago de regalías, pago de cánones por administración y asistencia técnica;
- (d) pagos realizados en virtud de un contrato; y
- (e) pagos efectuados en virtud del Artículo 6 (Expropiación y compensación).

2. Ninguna disposición de este Acuerdo impedirá a las Partes condicionar o prohibir temporalmente las transferencias en virtud de lo establecido en sus leyes y reglamentos. En particular, cualquiera de las Partes podrá adoptar medidas con respecto a:

- (a) la quiebra, insolvencia o protección de los derechos de acreedores;
- (b) el cumplimiento de obligaciones fiscales;
- (c) las infracciones criminales o penales;
- (d) la preparación de informes financieros o el registro de transferencias cuando resulte necesario para asistir a las autoridades a cargo de la implementación de las leyes o monitorear el cumplimiento de las reglamentaciones de la Parte receptora;
- (e) el cumplimiento de resoluciones o sentencias dictadas en procedimientos judiciales o administrativos.

3. En caso de que existan graves dificultades financieras o de la balanza de pagos reales o inminentes, la Parte receptora podrá adoptar o mantener restricciones temporales respecto de los pagos o transferencias que se contemplan en el presente Artículo, incluidas medidas de control cambiario que se condigan con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional.

Artículo 8: Trato en caso de conflicto armado o civil

Los inversores de una Parte cuyas inversiones sufran pérdidas en el territorio de la otra Parte con motivo de guerra o de otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, insurrección, disturbio civil o cualquier otro acontecimiento similar, serán tratados por esta otra Parte, respecto de las medidas adoptadas con relación a tales pérdidas, de manera no menos favorable que sus propios inversores o que los inversores de un tercer Estado.

Artículo 9: Subrogación

1. Con sujeción al consentimiento de la Parte receptora, si la otra Parte o cualquier agencia, institución, organismo o ente designado por ella efectúa un pago a un inversor en virtud de una garantía, un contrato de seguro u otra forma de indemnidad que haya acordado con respecto a una inversión, la Parte receptora reconocerá la subrogación o transferencia de cualquier derecho del que el inversor habría gozado en virtud del presente Acuerdo con respecto a la inversión si no se hubiese producido la subrogación.
2. Con sujeción al párrafo 1, el inversor no podrá perseguir el ejercicio de estos derechos en la medida de la subrogación.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

8



[Handwritten signatures]



Artículo 10: Tributación

1. Las disposiciones del presente Acuerdo no se aplicarán a las medidas impositivas.
2. Para mayor certeza, las disposiciones del presente Acuerdo no se interpretarán en el sentido de impedir la aplicación de acuerdos existentes o futuros sobre doble tributación y prevención de la evasión fiscal entre las Partes.

Artículo 11: Derecho a regular

A los efectos del presente Acuerdo, las Partes reconocen su derecho a regular en sus territorios con el fin de alcanzar objetivos legítimos de política pública, tales como la seguridad nacional, la protección de la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública, la protección social y del consumidor o la promoción y protección de la diversidad cultural.

Artículo 12: Inversión y objetivos regulatorios ambientales, de salud y de otra índole

1. Las Partes reconocen que resulta inapropiado fomentar inversiones mediante la flexibilización de las medidas locales relativas a objetivos regulatorios ambientales, de salud o de otra índole. En consecuencia, las Partes no deben dejar de aplicar, flexibilizar ni apartarse de otro modo de dichas medidas, como tampoco ofrecerse a dejar de aplicarlas, flexibilizarlas ni apartarse de ellas de otro modo, como un incentivo para el establecimiento, la adquisición, la expansión o la retención de las inversiones de un inversor en su territorio.
2. Las Partes se esforzarán por no dejar de aplicar, flexibilizar o apartarse de medidas como un incentivo para el establecimiento, la retención o la disposición de las inversiones de un inversor de la otra Parte en su territorio. Las Partes se esforzarán por no ofrecerse a dejar de aplicar, flexibilizar o apartarse de medidas en cuestión como un incentivo para el establecimiento, la retención o la disposición de las inversiones de un inversor de la otra Parte en su territorio.

Artículo 13: Denegación de beneficios

Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier momento, inclusive luego de la activación del mecanismo de solución de controversias establecido en la Sección B del presente, denegar los beneficios de este Acuerdo a:

- (a) un inversor de la otra Parte que sea una persona jurídica de dicha Parte y las inversiones de dicho inversor, en caso de que un inversor de un país que no sea Parte ostente la titularidad o el control de dicha persona jurídica y ésta no desarrolle actividades económicas significativas en el territorio de la otra Parte;
- (b) un inversor de la otra Parte que sea una persona jurídica de dicha Parte y las inversiones de dicho inversor, en caso de que un inversor de la Parte que deniegue los beneficios ostente la titularidad o el control de dicha persona jurídica y ésta no desarrolle actividades económicas significativas en el territorio de la otra Parte;

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Willy Ag
[Signature]



(c) las inversiones o los inversores que se hayan establecido o reestructurado con el propósito primario de obtener acceso al mecanismo de solución de controversias incorporado en la Sección B del presente Acuerdo.

Artículo 14: Cumplimiento de la legislación de la Parte receptora de la inversión

Las Partes reconocen que:

- (a) los inversores y las inversiones de cada Parte cumplirán con las leyes, regulaciones y políticas de la Parte receptora de la inversión con respecto a la administración, operación y disposición de las inversiones;
- (b) los inversores no ofrecerán, prometerán ni otorgarán ninguna ventaja pecuniaria o gratificación —directa ni indirecta— a funcionarios públicos de la Parte receptora de la inversión en carácter de inducción o reconocimiento por la realización de actos oficiales indebidos o para obtener ventajas indebidas;
- (c) los inversores deberán esforzarse por suministrar la información que requiera la Parte receptora de la inversión referida a los antecedentes y las prácticas de la persona jurídica en cuestión a los fines de la toma de decisiones o a efectos estadísticos;

Artículo 15: Facultades regulatorias relativas a los derechos de propiedad intelectual

Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo no se interpretarán en el sentido de restringir el derecho de las Partes de adoptar medidas relativas a la propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo ADPIC u otros tratados sobre derechos de propiedad intelectual de los que ambas sean Parte.

Artículo 16: Interacción con el sector privado

Reconociendo el rol fundamental del sector privado, las Partes intentarán difundir entre los sectores empresariales pertinentes información general sobre inversiones, marcos regulatorios y oportunidades comerciales en el territorio de la otra Parte.

Artículo 17: Responsabilidad social empresarial

Las Partes, respetando los estándares, directrices y principios reconocidos internacionalmente en materia de responsabilidad social empresarial, incluidas las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, se esforzarán por alentar a las empresas que realicen actividades económicas en su territorio o se encuentren sujetas a su jurisdicción a que incluyan voluntariamente dichos estándares, directrices y principios.

Artículo 18: Medidas generales no prohibidas

Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá la implementación por cualquiera de las Partes de las medidas que considere necesarias a fin de:

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

10





- (a) el mantenimiento del orden público;
- (b) la protección de sus propios intereses nacionales, incluidos sus intereses esenciales de seguridad;
- (c) el cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento o la restauración de la paz o seguridad internacionales;
- (d) la protección de la vida humana, animal y vegetal o de la salud;
- (e) la protección y conservación del medio ambiente, incluidos todos sus recursos naturales vivos y no vivos;
- (f) la protección de los tesoros nacionales o monumentos de valor artístico, cultural, histórico y arqueológico.

PARTE II: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Sección A: Solución de controversias relativas a la interpretación o implementación del presente Acuerdo

Artículo 19: Procedimiento para la solución de controversias relativas a la interpretación o implementación del presente Acuerdo

1. Las Partes intentarán resolver cualquier controversia que surja entre ellas respecto de la interpretación o implementación del presente Acuerdo mediante consultas amistosas.
2. Si una controversia no pudiese ser dirimida según lo dispuesto en el párrafo 1 dentro de un plazo de seis meses contado desde la fecha en que una de las Partes haya solicitado a la otra por escrito una solución amistosa, la controversia podrá ser sometida a un Tribunal Arbitral ad hoc, a petición de cualquiera de las Partes. El Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI será de aplicación salvo que el presente Acuerdo o las Partes dispongan lo contrario.
3. La CPA administrará el proceso arbitral, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
4. El Tribunal Arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones serán vinculantes. Las Partes sufragarán todos los gastos del procedimiento arbitral en partes iguales.

Sección B: Solución de controversias entre una Parte y un inversor de la otra Parte

Artículo 20: Consultas y negociación

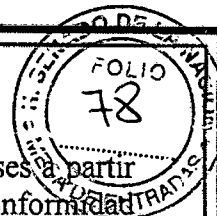
1. En caso de que surja una controversia relativa a una inversión, esta se resolverá, en la medida de lo posible, de forma amistosa mediante consultas y negociaciones, incluida la utilización de procedimientos no vinculantes, como la mediación y la conciliación.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

11



[Handwritten signatures and initials]



2. Las consultas deberán celebrarse durante un período mínimo de cinco meses a partir de la recepción por parte de la demandada de una solicitud de consultas de conformidad con el párrafo 4 del presente Artículo.
3. Salvo acuerdo en contrario, se celebrarán consultas en el territorio de la Parte receptora de la inversión.
4. Los inversores que persigan la celebración de consultas presentarán una solicitud escrita de consultas, en la que deberán especificar:
 - (a) el nombre y domicilio del inversor y, en caso de que el reclamo se realice en nombre de una empresa, el nombre, domicilio y lugar de constitución de la empresa;
 - (b) la disposición de este Acuerdo presuntamente violada y cualquier otra disposición aplicable;
 - (c) las cuestiones de hecho y de derecho en relación con cada reclamo;
 - (d) la reparación que se solicita y el monto aproximado de los daños reclamados; y
 - (e) las pruebas que respaldan la condición de inversor de la otra Parte y la existencia de la inversión.
5. El mediador será designado de mutuo acuerdo por las partes contendientes. Las partes contendientes también podrán solicitar que el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI o el Secretario General de la PCA designen al mediador.
6. En caso de que un inversor no presente un reclamo de conformidad con el Artículo 21 (Sometimiento de una controversia a arbitraje por parte de un inversor de una de las Partes en nombre propio o en nombre de una empresa) dentro de un año contado a partir de la presentación de una solicitud de consultas, se considerará que la demandante ha retirado su solicitud de consultas y no podrá presentar ningún reclamo en virtud de la presente Sección en relación con las mismas medidas. Dicho período podrá prorrogarse de mutuo acuerdo.
7. Para mayor certeza, el comienzo del proceso de consultas y negociaciones en virtud del presente Artículo no se interpretará en el sentido de reconocer la jurisdicción de ningún Tribunal Arbitral que se constituya en lo sucesivo, de acuerdo con la presente Sección.

Artículo 21: Sometimiento de una controversia a arbitraje por parte de un inversor de una de las Partes en nombre propio o en nombre de una empresa

1. Una vez transcurridos al menos seis meses desde la recepción de una solicitud escrita de consultas en virtud del Artículo 20 (Consultas y negociación), el inversor de la otra Parte:
 - (a) podrá someter un reclamo a arbitraje en nombre propio, de acuerdo con la presente Sección, en el cual deberá indicar:
 - (i) que la parte contendiente pertinente ha incumplido una obligación prevista en la Parte I (Disposiciones Sustantivas) con respecto a la administración, realización, operación y venta u otra forma de disposición de una inversión; o

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

12



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(ii) que la demandante ha sufrido una pérdida o daño como consecuencia de dicho incumplimiento o en relación con él.

(b) podrá someter un reclamo a arbitraje en nombre de una empresa de la demandada que revista el carácter de persona jurídica de la cual la demandante ostente la titularidad o el control directo o indirecto, de acuerdo con la presente sección, en el cual deberá indicar:

(i) que la parte contendiente pertinente ha incumplido una obligación prevista en la Parte I (Disposiciones Sustantivas), con excepción de los Artículos 12 (Inversión y objetivos regulatorios ambientales, de salud y de otra índole) y 17 (Responsabilidad social empresarial), con respecto a la administración, realización, operación y venta u otra forma de disposición de una inversión; o

(ii) que la empresa ha sufrido una pérdida o daño como consecuencia o en relación con dicho incumplimiento;

2. De conformidad con las disposiciones del párrafo 1, la demandante y la demandada podrán acordar someter su reclamo a:

(a) un Tribunal Arbitral constituido en virtud del Convenio CIADI, siempre que ambas Partes sean partes en dicho Convenio;

(b) un Tribunal Arbitral constituido en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, el cual será administrado por la CPA; o

(c) un Tribunal Arbitral ad hoc.

3. En el caso de que la demandante y la demandada no puedan llegar a un acuerdo sobre uno de los procedimientos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, cualquiera de ellas podrá someter la controversia a arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

4. Las normas de arbitraje aplicables serán: en el caso del párrafo 2 (a), las Reglas de Arbitraje del Convenio del CIADI; en el caso del párrafo 2 (b), el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, y en el caso del párrafo 2 (c), las reglas de arbitraje elegidas por mutuo acuerdo entre las partes contendientes. Las normas aplicables regirán el arbitraje, salvo en la medida en que se vean modificadas por la presente Sección o por acuerdo entre las partes contendientes.

5. Para mayor certeza, una controversia podrá resolverse amigablemente en cualquier momento, incluso luego de que la controversia se haya sometido a arbitraje de conformidad con el presente artículo:

6. El inversor que desee iniciar un arbitraje deberá presentar una solicitud de arbitraje de conformidad con el artículo 42, especificando:

(a) el nombre y domicilio del inversor y, en caso de que el reclamo se realice en nombre de una empresa, el nombre, domicilio y lugar de constitución de la empresa;

(b) la disposición de este Acuerdo presuntamente violada y cualquier otra disposición aplicable;

(c) los fundamentos de hecho y de derecho en relación con el reclamo;

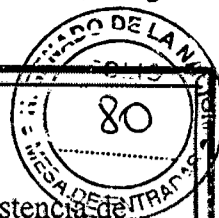
(d) la reparación que se solicita y el monto aproximado de los daños reclamados; y

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

13



[Handwritten signatures and initials]



(e) las pruebas que respaldan la condición de inversor de la otra Parte y la existencia de la inversión.

7. Sin perjuicio del párrafo 1 del presente artículo, ningún reclamo podrá ser sometido a arbitraje si han transcurrido más de tres años desde la fecha en que la parte demandante tuvo conocimiento por primera vez, o debió haber tenido conocimiento por primera vez, de la presunta violación conforme a lo establecido en el artículo 1.

Artículo 22: Condiciones para el sometimiento de una controversia a arbitraje

1. Por sí o en representación de una empresa de la demandada con personería jurídica de titularidad de la demandante o controlada directa o indirectamente por la demandante, la demandante solo podrá someter una controversia a arbitraje conforme a la presente Sección en los siguientes casos:

(a) si la demandante otorga su consentimiento para someterse a arbitraje de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Acuerdo; y

(b) si la demandante y la persona jurídica (en el caso de que el reclamo se refiera a un perjuicio o daño sobre una participación en una empresa de la otra Parte con personería jurídica de titularidad de la demandante o controlada directa o indirectamente por la demandante) renuncian a su derecho de iniciar o continuar procedimientos ante una autoridad administrativa o judicial conforme a la legislación de cualquiera de las Partes u otro mecanismo de resolución de controversias respecto de la medida implementada por la parte contendiente en presunta violación de lo establecido en la Parte I (Disposiciones Sustantivas).

2. El consentimiento y la renuncia exigidos conforme al presente artículo se otorgarán por escrito, se entregarán al demandado y se incluirán al someter la controversia a arbitraje.

Artículo 23: Consentimiento de ambas Partes al arbitraje

Cada una de las Partes presta su consentimiento para someter una controversia a arbitraje conforme a la presente Sección de conformidad con el Acuerdo.

Artículo 24: Financiamiento de terceros

No se permitirá el financiamiento de terceros.

Artículo 25: Cantidad de árbitros y método de designación

1. A menos que las partes contendientes dispongan lo contrario, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros, uno designado por cada una de las partes contendientes y un tercero que oficiará de presidente del Tribunal Arbitral, designado por acuerdo entre las partes contendientes.

2. Los árbitros deberán contar con experiencia adecuada en materia de derecho internacional público y reglas internacionales sobre inversiones, o de solución de disputas relacionadas con acuerdos internacionales de inversión. Serán imparciales,

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

14



[Handwritten signatures]

independientes, y no dependerán de ninguna de las Partes, ni de la demandante o de sus representantes, ni recibirán instrucciones de ninguno de ellos. Los árbitros no participarán en el análisis de ninguna controversia que pueda derivar en un conflicto directo o indirecto de interés. Cumplirán con las pautas establecidas en la Parte II, Sección C del presente Acuerdo (Disposiciones aplicables a la conducta de los árbitros), así como con las Directrices de la Asociación Internacional de Abogados sobre los Conflictos de Interés en el Arbitraje Internacional, y con toda norma complementaria que acuerden las partes contendientes. Asimismo, al ser designados, los árbitros deberán abstenerse de prestar asesoramiento, actuar en calidad de peritos de parte o comparecer como testigos en cualquier controversia en proceso relativa a inversiones, al presente Acuerdo o a otro acuerdo internacional.

Artículo 26: Constitución del Tribunal Arbitral en caso de que alguna de las Partes no designara un árbitro o las partes contendientes no llegaran a un acuerdo respecto de la designación del Presidente del tribunal

1. Si alguna de las Partes no designara a su árbitro o si no hubiera acuerdo entre las partes contendientes respecto del Presidente del Tribunal Arbitral en un período de 90 días desde la fecha en la que se sometía la controversia a arbitraje conforme a la presente Sección, el Tribunal se constituirá de acuerdo con las disposiciones de las Reglas de Arbitraje aplicables de conformidad con el artículo 21 (Sometimiento de una controversia a arbitraje por parte de un inversor de una de las Partes en nombre propio o en nombre de una empresa) del presente Acuerdo.
2. Los nacionales de la demandada y de la Parte de la demandante no podrán ser designados Presidentes del Tribunal Arbitral salvo pacto en contrario de las Partes contendientes.

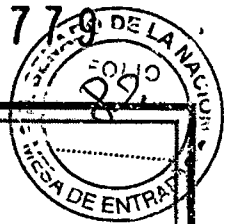
Artículo 27: Acumulación de procedimientos

1. En caso de que se sometan dos o más controversias a arbitraje por separado conforme al artículo 21 (Sometimiento de una controversia a arbitraje por parte de un inversor de una de las Partes en nombre propio o en nombre de una empresa) y los reclamos presenten una cuestión de hecho o de derecho en común y surjan de los mismos hechos o circunstancias, cualquiera de las partes contendientes podrá solicitar una orden de acumulación, con el consentimiento de la otra parte contendiente que se vería afectada por la orden o de acuerdo con los términos de los párrafos 2 al 10.
2. La parte contendiente que desee obtener una orden de acumulación conforme al presente artículo deberá enviar una solicitud por escrito al Secretario General del CIADI o al Secretario General de la CPA, según corresponda, y a la otra parte contendiente que se vería afectada por la orden, especificando lo siguiente:
 - (a) nombre y domicilio de la parte contendiente que se vería afectada por la orden de acumulación;
 - (b) la naturaleza de la orden de acumulación que se solicita; y
 - (c) los motivos por los que se solicita la orden.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures and initials]



3. A menos que el Secretario General del CIADI o el Secretario General de la CPA, según corresponda, decida, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de una solicitud presentada de acuerdo con el párrafo 2, que dicha solicitud es manifiestamente infundada, se constituirá un Tribunal Arbitral conforme al presente artículo.

4. Salvo acuerdo en contrario de todas las partes contendientes que se verían afectadas por la acumulación, el Tribunal Arbitral constituido conforme al presente artículo estará compuesto por tres árbitros;

(a) un árbitro designado por acuerdo entre las demandantes;

(b) un árbitro designado por la demandada; y

(c) el Presidente del Tribunal Arbitral, designado por el Secretario General del CIADI o el Secretario General de la CPA, según corresponda, que no podrá ser un nacional de la demandada ni de la Parte de ninguna demandante.

5. Si la demandada o las demandantes no designan un árbitro de conformidad con el párrafo 4 dentro de un plazo de 60 días desde la fecha de recepción por parte del Secretario General del CIADI o del Secretario General de la CPA, según corresponda, de la solicitud realizada conforme al párrafo 2, el Secretario General del CIADI o el Secretario General de la CPA, según corresponda, designará, a solicitud de cualquiera de las partes contendientes que se vean afectadas por la acumulación, al árbitro o los árbitros no designados, a su discreción.

6. Si un Tribunal Arbitral establecido conforme al presente artículo considera que dos o más reclamos sometidos a arbitraje de acuerdo con el artículo 21.1 (Sometimiento de una controversia a arbitraje por parte de un inversor de una de las Partes en nombre propio o en nombre de una empresa) presentan una cuestión de hecho o de derecho en común, y surgen de los mismos hechos o circunstancias, el Tribunal Arbitral podrá, en pos de la resolución justa y eficiente de los reclamos y previa audiencia a las partes contendientes, decidir:

(a) asumir jurisdicción sobre todas o parte de las controversias, y conocer y decidir las de manera conjunta;

(b) asumir jurisdicción, conocer y decidir una o más de las controversias, cuya determinación crea que podría ser de utilidad en la resolución de las otras; o

(c) ordenar a un Tribunal Arbitral previamente constituido conforme al artículo 25 (Cantidad de árbitros y método de designación) que asuma jurisdicción, conozca y decida todas o parte de las controversias de manera conjunta, con las siguientes condiciones:

(i) este último Tribunal Arbitral, a solicitud de una demandante que no era una parte contendiente ante dicho Tribunal Arbitral, se reconstituirá con sus integrantes originales, con la excepción del árbitro de la demandante, que será designado de conformidad con los párrafos 4(a) y 5; y

(ii) este último Tribunal Arbitral decidirá si se debe repetir alguna audiencia previa.

7. Si se ha constituido un Tribunal Arbitral de conformidad con el presente artículo, la demandante que hubiera sometido una controversia a arbitraje conforme al artículo 21.1 (Sometimiento de una controversia a arbitraje por parte de un inversor de una de las

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials in black ink.

Partes en nombre propio o en nombre de una empresa) y no hubiera sido nombrada en una solicitud realizada de acuerdo con el párrafo 2 podrá presentar una solicitud por escrito ante el Tribunal Arbitral para que se la incluya en la orden que se dicte conforme al párrafo 6. La solicitud indicará:

- (a) el nombre y la dirección de la parte demandante,
- (b) la naturaleza de la orden de acumulación que se solicita; y
- (c) los motivos por los que se solicita la orden.

La demandante enviará una copia de su solicitud al Secretario General del CIADI o al Secretario General de la CPA, según corresponda.

8. Un Tribunal Arbitral constituido de conformidad con el presente artículo procederá de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en todo lo que no esté previsto en la presente Sección

9. Un Tribunal Arbitral constituido de conformidad con el artículo 25 (Cantidad de árbitros y método de designación) no tendrá jurisdicción para decidir una controversia, o parte de una controversia, sobre la cual haya asumido jurisdicción un Tribunal Arbitral constituido o cuya constitución se haya ordenado conforme al presente artículo, sin perjuicio del párrafo 6(c).

10. A solicitud de una de las partes contendientes, un Tribunal Arbitral constituido conforme al presente artículo podrá, antes de dictar una decisión de acuerdo con el párrafo 6, ordenar la suspensión de los procedimientos de un Tribunal Arbitral constituido de conformidad con el artículo 25 (Cantidad de árbitros y método de designación), salvo que éste ya haya suspendido sus actuaciones.

Artículo 28: Excepciones preliminares

1. Cualquier objeción en el sentido de que la controversia no se encuentra dentro del ámbito de la jurisdicción o competencia del tribunal, resulta inadmisibles o carece manifiestamente de base jurídica deberá realizarse tan pronto como sea posible. La objeción no podrá, en ningún caso, ser sometida al Tribunal Arbitral por la parte contendiente pertinente después de la fecha que se fije para la presentación del memorial de contestación de demanda.

2. El Tribunal Arbitral podrá considerar de oficio, en cualquier etapa del procedimiento, si la controversia se encuentra dentro de su jurisdicción o competencia.

3. En el momento en que se reciba una objeción respecto de la controversia, el Tribunal Arbitral suspenderá cualquier actuación sobre el fondo de la controversia. El Presidente del Tribunal Arbitral, previa consulta con los demás miembros, establecerá un plazo para que las partes contendientes presenten observaciones a la objeción.

4. El Tribunal Arbitral decidirá si los procedimientos siguientes relativos a la objeción presentada conforme al párrafo 1 serán orales. Si el Tribunal Arbitral rechaza la objeción o la acumula con las actuaciones sobre el fondo de la controversia, volverá a establecer plazos para los procedimientos siguientes. La demandada podrá, al presentar su memorial de contestación de demanda o posteriormente, si el Tribunal Arbitral entiende que las circunstancias justifican la demora, presentar una reconvencción

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

17

Página 17 de 57



[Handwritten signatures and marks]

directamente relacionada con la controversia, especificando de manera precisa los fundamentos de la reconvencción.

5. Si el Tribunal Arbitral entiende que la controversia está fuera de su jurisdicción o competencia, o que todos los reclamos carecen manifiestamente de base jurídica, dictará un laudo a tal efecto.

Artículo 29: Lugar del Procedimiento de Arbitraje

Las partes contendientes podrán acordar la sede legal del arbitraje conforme a las reglas de arbitraje aplicables de acuerdo con el artículo 21 (Sometimiento de una controversia a arbitraje por parte de un inversor de una de las Partes en nombre propio o en nombre de una empresa). Si las partes contendientes no llegaran a un acuerdo y hubieran decidido no aplicar las Reglas de Arbitraje del CIADI, el Tribunal Arbitral fijará, conforme a las reglas de arbitraje aplicables, su sede en La Haya.

Artículo 30: Ley aplicable

1. El Tribunal Arbitral decidirá la controversia de conformidad con el presente Acuerdo, y aplicará el derecho del Estado parte de la controversia (incluidas sus disposiciones de derecho internacional privado) y las normas de derecho internacional que resulten aplicables.

2. Una interpretación de cualquier disposición del presente Acuerdo formulada de manera conjunta y acordada entre los Estados Partes será vinculante para un Tribunal Arbitral constituido de conformidad con el mismo.

Artículo 31: Informes periciales

Sin perjuicio de la designación de otras clases de expertos cuando lo autoricen las reglas de arbitraje aplicables, el Tribunal Arbitral podrá, a solicitud de una de las partes contendientes o, salvo desacuerdo de las partes contendientes, de oficio, designar uno o más peritos para que elaboren informes escritos sobre cualquier cuestión de hecho respecto de temas ambientales, sanitarios, de seguridad o científicos planteados por una de las partes contendientes en el procedimiento, con sujeción a los términos y condiciones acordados por las partes contendientes.

Artículo 32: Medidas provisionales de protección

1. Un Tribunal Arbitral podrá, a instancia de una de las partes contendientes y si las circunstancias del caso lo ameritan, dictar una medida provisional de protección a fin de preservar los derechos de una parte contendiente o para asegurar que la jurisdicción del Tribunal Arbitral sea plenamente efectiva, incluida una orden para preservar las pruebas que estén en posesión o bajo el control de una parte contendiente o para proteger la jurisdicción del Tribunal Arbitral.

2. La solicitud deberá especificar los derechos que se salvaguardarán, las medidas solicitadas y las circunstancias que hacen necesaria la implementación de dichas

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

18

Página 18 de 57



[Handwritten signatures and initials]

medidas. Asimismo, la parte contendiente que solicita la medida provisional deberá acreditar ante el Tribunal Arbitral:

- (a) que, de no dictarse la medida provisional, es probable que se produzca algún daño no resarcible mediante el pago de una indemnización y que sea notablemente más grave que el daño que podría sufrir la parte afectada por la medida, en caso de ser otorgada; y
- (b) que es razonablemente probable que prospere su demanda sobre el fondo de la controversia. La decisión del Tribunal Arbitral respecto de dicha probabilidad no prejuzgará en modo alguno toda determinación posterior que pueda adoptar el Tribunal Arbitral.

3. El Tribunal Arbitral sólo dictará medidas provisionales o modificará o revocará las que haya dictado previamente, luego de otorgar a cada parte la oportunidad de que presente sus observaciones.

4. El Tribunal Arbitral podrá exigir a la parte contendiente que solicite una medida provisional que preste una garantía adecuada respecto de la medida que ha solicitado.

Artículo 33: Laudos

1. Cuando un Tribunal Arbitral dicte un laudo definitivo, el Tribunal Arbitral podrá otorgar, por separado o en combinación, únicamente:

- (a) daños pecuniarios y los intereses correspondientes; y
- (b) restitución de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrá que el demandado pueda pagar daños pecuniarios, más los intereses que procedan en lugar de la restitución.

El Tribunal Arbitral también podrá conceder costas de conformidad con esta Sección y con las reglas de arbitraje aplicables.

2. De conformidad con el párrafo anterior, cuando el reclamo lo realice un inversor en representación de una empresa:

- (a) el laudo que prevea la restitución de la propiedad dispondrá que la restitución se otorgue a la empresa;
- (b) el laudo que conceda daños pecuniarios y los intereses que procedan dispondrá que la suma de dinero sea abonada a la empresa.

3. Un Tribunal Arbitral no podrá ordenar que una Parte pague daños de carácter punitivo.

4. El laudo dictado por un Tribunal Arbitral tendrá fuerza obligatoria sólo para las partes contendientes y únicamente respecto del caso concreto.

5. Una parte contendiente no podrá solicitar la ejecución de un laudo definitivo en tanto:

- (a) en el caso de un laudo definitivo dictado conforme al Convenio del CIADI:
 - (i) no hayan transcurrido 120 días desde la fecha en que el laudo fue dictado y ninguna parte contendiente haya solicitado su revisión o anulación conforme a los Artículos 51 y 52, respectivamente, del Convenio del CIADI; o
 - (ii) no hayan concluido los procedimientos de revisión o anulación; y

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

19



Wiley AC
[Handwritten signature]

(b) en el caso de un laudo definitivo conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI:

(i) no hayan transcurrido 90 días a partir de la fecha en que el laudo fue dictado y ninguna parte contendiente haya solicitado su revisión, revocación o anulación, o

(ii) un tribunal no haya desestimado o concedido una solicitud de revisión, revocación o anulación del laudo y esta resolución no pueda recurrirse.

6. Cada Parte dispondrá la debida ejecución de un laudo en su territorio.

7. A los efectos del Artículo 1 de la Convención de Nueva York, se considerará que un reclamo sometido a arbitraje conforme a la presente Sección resulta de una relación o transacción comercial.

Sección C: Disposiciones aplicables a la conducta de los árbitros

Artículo 34: Conducta de los árbitros

1. Las disposiciones de este Artículo se aplicarán a los procedimientos llevados a cabo de conformidad con las Secciones A y B. En caso de incompatibilidad entre las disposiciones de la presente Sección y las Directrices de la Asociación Internacional de Abogados sobre los Conflictos de Interés en el Arbitraje Internacional, prevalecerán las primeras.

2. Los miembros de los Tribunales Arbitrales deberán ser independientes e imparciales y deberán evitar todo conflicto directo o indirecto de interés. Asimismo, deberán respetar la confidencialidad de los procedimientos.

Artículo 35: Obligaciones relativas a la revelación de información

1. Cada árbitro deberá, antes de aceptar la designación, revelar la existencia de cualquier interés, relación o asunto que de modo razonable pueda esperarse que conozca, y que pudiera afectar o generar dudas justificadas en cuanto a la independencia o imparcialidad del árbitro, incluidas las declaraciones públicas u opiniones personales sobre asuntos relacionados con la controversia y cualquier relación profesional con alguna persona u organización que pudiera tener algún interés en el caso.

2. La obligación de revelar información es permanente y obliga a los árbitros a revelar la existencia de cualquier interés, relación o asunto que pudiera surgir durante cualquiera de las etapas del procedimiento.

Artículo 36: Deberes de los árbitros

1. Al ser designados, los árbitros deberán cumplir con sus obligaciones en forma exhaustiva y expeditiva durante el procedimiento. Esas obligaciones deberán cumplirse con equidad y diligencia.

2. Los árbitros deberán tener en cuenta solamente los asuntos que surjan en el procedimiento y que sean necesarios para emitir una decisión.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

20



[Handwritten signatures and initials]

3. Los árbitros no podrán discutir ningún aspecto de la controversia que deban resolver con una de las Partes contendientes en ausencia de la otra.

Artículo 37: Independencia e imparcialidad de los árbitros

1. Los árbitros deberán:

- (a) ejercer sus funciones sin aceptar ni pedir instrucciones de ninguna institución internacional, gubernamental o no gubernamental ni de ninguna fuente privada,
- (b) ser independientes e imparciales y no estarán influenciados por intereses personales, consideraciones políticas u opiniones públicas,
- (c) evitar iniciar una relación o adquirir un interés financiero que pudiera afectar su imparcialidad o que razonablemente pudiera crear la apariencia de parcialidad.

2. Los árbitros no podrán:

- (a) de manera directa o indirecta, asumir obligaciones o aceptar beneficios que pudieran interferir en modo alguno con el debido cumplimiento de sus obligaciones o dar lugar a dudas justificadas sobre ese cumplimiento,
- (b) valerse de la función que ocupen en el Tribunal Arbitral para obtener beneficios personales o privados de cualquier tipo, o
- (c) permitir que su conducta o sus decisiones se vean afectadas por relaciones o responsabilidades financieras, de negocios, profesionales, familiares o sociales.

Artículo 38: Obligaciones de quienes se hayan desempeñado como árbitros

Toda persona que haya ejercido la función de árbitro deberá evitar todo tipo de ventajas derivadas de las decisiones o laudos arbitrales adoptados por el Tribunal Arbitral.

Artículo 39: Confidencialidad

- 1. Ningún árbitro, o quien haya sido árbitro, podrá en momento alguno revelar o utilizar información no pública relativa a un procedimiento u obtenida durante un procedimiento, excepto a los efectos de dicho procedimiento y no deberá, en caso alguno, revelar o utilizar esa información para obtener ventajas para sí o para terceros o con la finalidad de afectar indebidamente intereses de terceros.
- 2. Los árbitros o quienes hayan ejercido tal función no deberán dar a conocer, en momento alguno, las deliberaciones de un Tribunal Arbitral como la opinión de un árbitro.

Artículo 40: Compromiso

Los árbitros, inmediatamente luego de su designación y antes de su aceptación del cargo, deberán suscribir el siguiente compromiso:

"Mediante el presente acepto la designación para desempeñarme como árbitro, de conformidad con el párrafo []. Declaro no tener ningún interés en la controversia ni

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures]

ninguna otra razón que pudiera impedir mi función como miembro del Tribunal Arbitral, constituido con el fin de resolver la controversia entre las Partes.

Me comprometo a desempeñarme de manera independiente, imparcial, con integridad, y a evitar, directa o indirectamente, conflictos de intereses, y a no aceptar sugerencias o imposiciones de terceros, así como a no recibir remuneraciones relacionadas con mi actuación, con excepción de las comprendidas en este Acuerdo.

Me comprometo a revelar en este acto, y en el futuro, cualquier información que pueda afectar mi independencia e imparcialidad, o que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre la integridad e imparcialidad del presente mecanismo de solución de controversias.

Me comprometo a cumplir con mis obligaciones de confidencialidad respecto de los procedimientos de solución de controversias y del contenido de mi voto".

Artículo 41: Recusación de árbitros

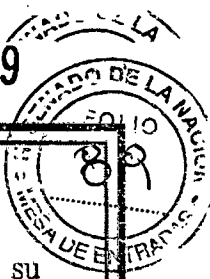
1. Un árbitro podrá ser recusado por la falta de cumplimiento de los requisitos para ser designado árbitro, incapacidad sobreviniente o inhabilidad para desempeñar el cargo, o si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia.
2. Las partes contendientes no podrán recusar a un árbitro nombrado por ellas sino por causas de las que hayan tenido conocimiento después de su designación.
3. La parte contendiente que desee recusar a un árbitro deberá notificar su decisión en el plazo de 45 días contados desde la fecha en que se le notificó el nombramiento del árbitro que pretende recusar o en el plazo de 45 días a partir de la fecha en que tuvo conocimiento si las circunstancias surgen con posterioridad al nombramiento.
4. La recusación deberá ser fundada y notificada a la otra parte, al árbitro recusado y a los otros miembros del Tribunal Arbitral.
5. La parte contendiente que notifique la decisión de recusar a un árbitro podrá ampliar los fundamentos de su recusación con posterioridad a dicha notificación.
6. Cuando un árbitro haya sido recusado por una parte, la otra parte podrá aceptar la recusación. El árbitro también podrá, después de la recusación, renunciar al cargo. Ningún caso implicará la aceptación de la validez de las razones que funden la recusación.
7. Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que fue notificada la recusación, las partes no prestan su conformidad a la recusación o el árbitro recusado no renuncia, la parte contendiente que presentó la recusación podrá optar por mantenerla. En tal caso, en el plazo de 30 días desde la fecha de notificación de la recusación, dicha parte contendiente podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que adopte una decisión fundada respecto de la recusación.
8. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia declara procedente la recusación, la parte contendiente deberá designar un nuevo árbitro y, en caso de que sea necesario reemplazar a un árbitro durante el procedimiento, se designará un árbitro sustituto.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

22



Willy Ser
[Signature]



9. El procedimiento se suspenderá hasta que las partes contendientes den su consentimiento a la recusación, el árbitro recusado renuncie o se adopte una decisión respecto de la recusación propuesta.

Parte III: Disposiciones generales y finales

Artículo 42: Disposiciones generales

Momento en que el reclamo se considera sometido al procedimiento arbitral

Un reclamo se considera sometido a arbitraje en los términos del presente en los siguientes supuestos:

- (a) cuando la solicitud de arbitraje conforme al párrafo 1 del Artículo 36 del Convenio del CIADI haya sido registrada por el Secretario General, de conformidad con el párrafo 3 de dicho Artículo; o
- (b) cuando la parte contendiente haya recibido la notificación de arbitraje contemplada en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

Entrega de documentos

1. Los documentos se entregarán en el lugar especificado por cada Parte. Cada Parte deberá notificar y hacer pública de inmediato cualquier modificación respecto del lugar especificado en esta Parte.

2. El lugar de presentación de la notificación de intención de arbitraje y otros documentos referidos a la solución de controversias de conformidad con la Sección B será:

(a) Para la República Argentina:

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Esmeralda 1212,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina; y

Procuración del Tesoro de la Nación
Posadas 1641,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina;

o sus sucesores.

(b) Para los Emiratos Árabes Unidos:

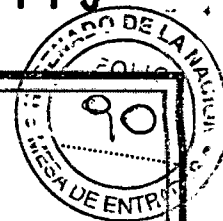
Ministerio de Finanzas
Al Falah 9
P.O. Box 433
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE

23



Handwritten signatures and initials.



o su sucesor.

Artículo 43: Entrada en vigor

- 1. El presente Acuerdo y todas sus enmiendas entrarán en vigor en la fecha de recepción de la última notificación cursada por escrito por cualquiera de las Partes a fin de informar, por la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos jurídicos internos requeridos a tal efecto.
- 2. El presente Acuerdo podrá ser modificado mediante acuerdo por escrito entre las dos Partes.

Artículo 44: Duración y terminación

- 1. El presente Acuerdo tendrá una duración de 10 años. Con posterioridad a dicho plazo, permanecerá vigente a menos que una de las Partes notifique a la otra por escrito su intención de darlo por terminado. La notificación de denuncia entrará en vigor un año después de su recepción por parte de la otra Parte.
- 2. Respecto de las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de terminación del presente Acuerdo, continuarán en vigor las disposiciones del Acuerdo por el plazo de dos años contados desde la fecha de su denuncia.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, suscriben el presente Acuerdo.

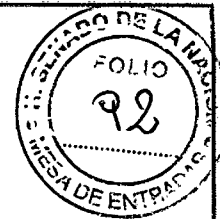
El presente Acuerdo ha sido redactado y firmado en Abu Dhabi, el día 16 de abril de 2018, en dos originales en los idiomas español, árabe e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

POR LA REPUBLICA ARGENTINA

POR LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS



INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



PART I: SUBSTANTIVE PROVISIONS

Article 1: Definitions

For the purpose of this Agreement:

The term "ICSID" means the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) established by the ICSID Convention;

The term "ICSID Convention" means the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, done in Washington, 18 March 1965;

The term "investment" means any asset owned or controlled by an investor of a Party, either directly or indirectly, established in the territory of the other Party, in accordance with its laws and regulations and with characteristics such as: assumption of business risk, introduction of capital or other resources into the territory of the host Party and contribution to the economic development of that Party.

In particular, the term "investment" includes:

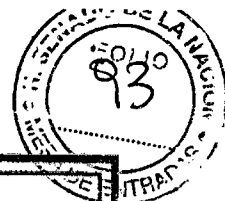
- (a) an enterprise;
- (b) shares, stock and other forms of equity participation in an enterprise;
- (c) loans and other financial instruments allocated for the fulfilment of a productive investment;
- (d) intellectual property rights under the terms of Article 15;
- (e) turnkey, construction, management, production, concession and profit sharing agreements;
- (f) licences, authorizations, permits and similar rights granted in accordance with the laws and regulations of each Party;¹

¹ Whether a type of licence, authorization, permit or similar instrument (including a concession, to the extent that it is of the same nature as this type of instrument) has the features of an investment depends on factors such as the nature and scope of the rights of the holder, pursuant to the legislation of the Party.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials.



(g) other tangible or intangible, movable or immovable property, and related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges.

The term "investment" does not include:

- (a) sovereign debt of a Party or debt of a State enterprise, which shall be subject to the applicable law, jurisdiction, and terms and conditions established in each relevant instrument;
- (b) debt securities such as bonds, debentures and any other financial instrument;
- (c) monetary claims exclusively arising from commercial contracts for the sale of goods or services;
- (d) judicial or administrative resolutions;
- (e) in the case of the Argentine Republic, concessions to search for, explore, extract or exploit natural resources, and natural resources, which shall be subject to the laws and regulations of the Argentine Republic;
- (f) in the case of the United Arab Emirates, concessions to search for, explore, extract or exploit natural resources, and natural resources, which shall not be covered by this Agreement.

The term "investor of a Party" means any natural or legal person who is a national of one of the Parties under the laws of the Party whose nationality is invoked and who makes an investment in the territory of the other Party;

The term "investor of a non-Party" means, with respect to a Party, an investor that makes an investment in the territory of that Party but which is not an investor of either Party;

The term "New York Convention" means the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958;

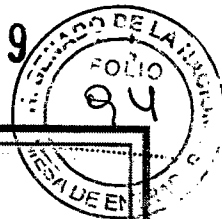
The term "TRIPS Agreement" means the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;

Licences, authorizations, permits or similar instruments that lack the features of an investment include those that do not give rise to protected rights under the domestic legislation.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MIRE



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'AG'.



The term **"national of a Party"** means:

- (a) natural persons who have the effective nationality of one of the Parties;
- (b) legal persons constituted under the legislation of one of the Parties which have their principal place of business in the territory of such Party.

The term **"principal place of business"** means the place where the main management of the legal person is located and where it conducts its substantial business activities.

For greater certainty, a natural person having dual nationality will be deemed to be national only of the State of its effective nationality.

The term **"national of a Party"** excludes:

- (a) natural persons permanently residing within the territory, or having the nationality, of the other Party;
- (b) a legal person constituted under the legislation of one of the Parties which has its principal place of business within the territory of such Party and which is controlled by nationals of a third State or of the host Party;
- (c) a legal person constituted under the legislation of such Party which does not conduct its substantial business activities within the territory of that Party.

The term **"PCA"** means the Permanent Court of Arbitration based in The Hague and established by the Convention for the Peaceful Adjustment of International Differences of 29 July 1899;

The term **"disputing party"** means either the claimant or the respondent; "disputing parties" means the claimant and the respondent;

The term **"freely usable currency"** means "freely usable currency" as determined by the International Monetary Fund under its Articles of Agreement;

The term **"territory"** means:

With respect to the ARGENTINE REPUBLIC: the territory subject to the sovereignty of the Argentine Republic, and the exclusive economic zone and the continental shelf with respect to which the Argentine Republic exercises sovereign

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE





rights or jurisdiction in accordance with its constitutional provisions, legal provisions and international law;

With respect to UNITED ARAB EMIRATES: the territory of the United Arab Emirates which is under its sovereignty as well as the area outside the territorial water, airspace and submarine areas over which the United Arab Emirates exercises sovereign and jurisdictional rights in respect of any activity carried on in its water, sea bed, subsoil, in connection with the exploration for or the exploitation of natural resources by virtue of its law and international law;

The term "UNCITRAL" means the United Nations Commission on International Trade Law;

The term "UNCITRAL Arbitration Rules" means the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law.

Article 2: Scope of Application

1. This Agreement shall only apply to measures adopted or maintained by a Party relating to:

(a) investors of the other Party;

(b) investments existing as of the effective date of entry into force of this Agreement or acquired or expanded thereafter;

(c) any action, event or situation arising after the date of entry into force of this Agreement or which is directly related to events or actions taking place after such date.

2. This Agreement shall not apply to:

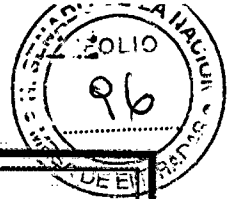
(a) the granting, suspension or renewal of subsidies or grants;

(b) government procurements.²

² The Parties deem the term government procurement to include both public contracts and public works.



[Handwritten signatures and initials]



Article 3: National Treatment

1. Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to its own investors with respect to the management, conduct, operation, and disposition of investments in its territory.
2. Each Party shall accord to investments treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investments of its own investors in its territory with respect to the management, conduct, operation, and other disposition of investments.
3. For greater certainty, whether a specific treatment is accorded in "like circumstances" pursuant to this Article will depend on the totality of the circumstances, including the distinction between investors or investments on the basis of legitimate public welfare objectives.
4. With respect to paragraph 1, each Party shall only admit the entry of investments established by investors of the other Party subject to its applicable laws and regulations.

Article 4: Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of any other State with respect to the management, conduct, operation, and disposition of investments in its territory.
2. Each Party shall accord to investments of the other Party treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investments of investors of any other State in its territory with respect to their management, conduct, operation, and disposition.
3. For greater certainty, treatment accorded in "like circumstances" pursuant to this Article will depend on all the circumstances, including the distinction between investors or investment on the basis of legitimate objectives of public welfare.
4. For greater certainty, the provisions in this Article shall not apply to incorporate substantive provisions on treatment which are not contained in this Agreement or to exclude rights or powers of the host Party which are provided for herein.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MIRE



Handwritten signatures and initials, including 'VUD' and 'AR'.

5. For greater certainty, the treatment referred to in this Article does not apply to procedural or jurisdictional matters.

6. The provisions of this Article shall not apply to invoke a more favourable treatment accorded by either Party under:

- (a) trade or tax agreements;
- (b) free trade zones;
- (c) customs unions;
- (d) common markets;
- (e) economic unions or other integration mechanisms;

to which the host Party is or becomes a party.

7. The provisions of this Article shall not apply to invoke a more favourable treatment accorded by either Party under bilateral investment treaties or other agreements containing provisions relating to investments signed prior to the entry into force of this Agreement.

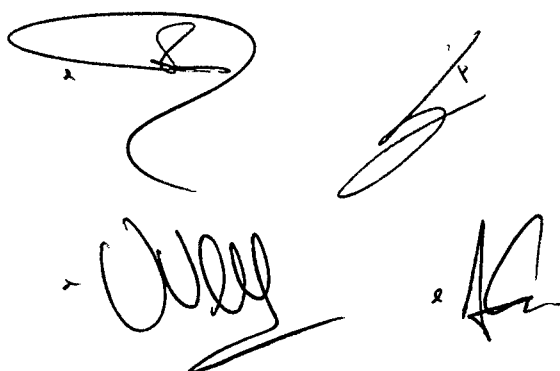
Article 5: Minimum Standard of Treatment

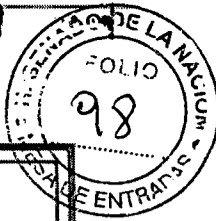
1. Each Party shall accord to investments treatment in accordance with the minimum standard of treatment to aliens under customary international law, including fair and equitable treatment and full protection and security.

2. For greater certainty, the concepts of "fair and equitable treatment" and "full protection and security" in paragraph 1 do not require treatment in addition to or beyond that which is required by the customary international law minimum standard of treatment of aliens:

- (a) "fair and equitable treatment" includes, taking into account the circumstances of the case, the obligation of the Parties not to incur in a denial of justice in criminal, civil or administrative adjudicatory proceedings in accordance with the principle of due process

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE





embodied in the principal legal systems of the world and to the extent that the conduct of the Parties is detrimental to the investor; and

(b) "full protection and security" requires each Party to provide the level of physical protection required under customary international law and does not require treatment in addition to or beyond that which is required by the customary international law minimum standard of treatment of aliens.

3. A determination that there has been a breach of another provision of this Agreement does not establish that there has been a breach of this Article.

4. Non-discriminatory and non-arbitrary legislative or regulatory measures adopted by either Party to protect general welfare objectives, such as public order, public health, public security, environmental protection and economic policy, and which give an investor of the other Party the same treatment as that accorded to its own investors or to investors of third States in like circumstances, shall not be deemed to breach the minimum standard of treatment.

Article 6: Expropriation and Compensation

1. No Party shall expropriate or nationalize an investment in its territory, either directly or indirectly, through measures equivalent to expropriation, except:

- (a) for a public purpose;
- (b) in a non-discriminatory manner;
- (c) in accordance with due process of law;
- (d) upon payment of compensation in accordance with paragraphs 4, 5 and 6.

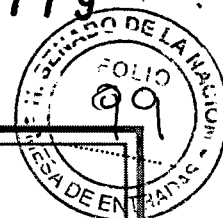
2. For the purposes of this Article:

- (a) direct expropriation means the formal transfer of ownership or property rights;
- (b) indirect expropriation means an action or a series of actions by a Party tantamount to direct expropriation without formal transfer of ownership or property rights.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top left, a signature at the top right, and several other signatures and initials below.



3. The Arbitral Tribunal will determine whether an action or a series of actions by either Party in a given case constitutes indirect expropriation or not based on an assessment of the facts as to:

- (a) whether the action or series of actions substantially affected an investment of an investor of the other Party made in the territory of the host Party, thus depriving the investor of the control and management of the investment;
- (b) the economic impact of the governmental act; and
- (c) the purpose and context of the governmental act.

4. The compensation referred to in paragraph 1 (d) shall:

- (a) be paid without undue delay;
- (b) be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately before the expropriation took place (the date of expropriation);
- (c) not reflect any change in value occurring because the intended expropriation had become known earlier; and
- (d) be fully realizable and freely transferable in accordance with the provisions of Article 7 (Transfers).

5. If the fair market value is denominated in a freely usable currency, the compensation paid shall be no less than the fair market value on the date of expropriation, plus simple interest at a commercially reasonable rate for that currency, accrued from the date of expropriation until the date of payment.

6. If the fair market value is denominated in a currency that is not freely usable, the compensation paid, converted into the currency of payment at the market exchange rate prevailing on the date of payment, shall be no less than:

- (a) the fair market value on the date of expropriation, converted into a freely usable currency at the market exchange rate prevailing on the date of payment, plus
- (b) simple interest at a commercially reasonable rate for that freely usable currency, accrued from the date of expropriation until the date of payment.

7. This Article shall not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights or to the revocation, limitation or creation of intellectual

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials.



property rights, to the extent that those actions are consistent with the TRIPS Agreement.

8. Non-discriminatory legislative or regulatory measures designed or applied by either Party to protect general welfare objectives, such as public order, public health, public security, environmental protection and economic policy, shall not constitute indirect expropriation.

Article 7: Transfers

1. Each Party, prior fulfilment of the requirements under its law and without unjustified delay, shall allow investors of the other Party to effect, in a freely convertible currency, transfers of:

- (a) capital contributions;
- (b) profits, dividends, and capital gains from the sale of all or any part of the investment or from its partial or complete liquidation;
- (c) interest, royalty payments, management fees, and technical assistance fees;
- (d) payments made under a contract; and
- (e) payments made under Article 6 (Expropriation and Compensation).

2. No provision in this Agreement shall prevent any Party from establishing conditions on or temporarily prohibiting transfers pursuant to the provisions of its laws and regulations. In particular, a Party may adopt measures with regard to:

- (a) bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of creditors;
- (b) fulfilment of fiscal obligations;
- (c) criminal or penal offences;
- (d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or monitor compliance with the regulations of the host Party;
- (e) compliance with orders or judgments in judicial or administrative proceedings.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



3. In the event of actual or imminent serious financial or balance of payments difficulties, the host Party may adopt or maintain temporary restrictions on the payments or transfers covered by this Article, including foreign exchange control measures consistent with the Articles of the Agreement of the International Monetary Fund.

Article 8: Treatment in Case of Armed Conflict or Civil Strife

Investors of a Party whose investments suffer losses in the territory of the other Party due to war or other armed conflict, revolution, state of national emergency, insurrection, civil disturbance or other similar events shall be accorded treatment by such Party no less favourable than that accorded to its investors or to investors of a third State with regards to any measures adopted in relation to such losses.

Article 9: Subrogation

1. Subject to the consent of the host Party, if the other Party, or any agency, institution, statutory body or corporation designated by such Party, makes a payment to an investor under a guarantee, a contract of insurance or another form of indemnity that it has entered into with respect to an investment, the host Party shall recognize the subrogation or transfer of any rights the investor would have possessed under this Agreement with respect to the investment but for the subrogation.
2. Subject to paragraph 1, the investor shall be precluded from pursuing these rights to the extent of the subrogation.

Article 10: Taxation

1. No provision in this Agreement shall be applied to tax measures.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials.



2. For greater certainty, nothing in this Agreement shall be construed to preclude the application of any existing or future agreement on double taxation and prevention of fiscal evasion between the Parties.

Article 11: Right to Regulate

For the purpose of this Agreement, the Parties recognise their right to regulate in their territories in order to achieve legitimate public policy objectives, such as national security, the protection of public health, safety, the environment, public morals, social and consumer protection, or the promotion and protection of cultural diversity.

Article 12: Investment and Environmental, Health and Other Regulatory Objectives

- 1. The Parties recognize that it is inappropriate to encourage investments by relaxing domestic measures relating to health, environment or other regulatory objectives. Accordingly, a Party should not waive, relax or otherwise derogate from, or offer to waive, relax or otherwise derogate from, such measures as an encouragement for the establishment, acquisition, expansion or retention in its territory of an investment of an investor.
- 2. The Parties will endeavour not to derogate from, waive or relax measures as an encouragement for the expansion, retention or disposition in its territory of an investment of an investor of the other Party. Furthermore, the Parties will endeavour not to offer to derogate from, waive or relax the measures in question as an encouragement for the establishment, acquisition, expansion or retention in its territory of an investment of an investor of the other Party.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including 'Udeley', 'AG', and a large signature.

Article 15: Regulatory Powers relative to Intellectual Property Rights



Nothing in this Agreement shall be construed to restrict the right of the Parties to adopt measures related to intellectual property in conformity with the TRIPS Agreement, or with other treaties on intellectual property rights to which both Parties are party.

Article 16: Interaction with the Private Sector

Recognizing the fundamental role of the private sector, the Parties shall seek to disseminate among the relevant business sectors general information on investing, the regulatory frameworks and business opportunities in the territory of the other Party.

Article 17: Corporate Social Responsibility

The Parties, being mindful of internationally-recognized corporate social responsibility standards, guidelines and principles, including the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises, shall endeavour to encourage enterprises doing business in its territory or subject to its jurisdiction to voluntarily include said standards, guidelines and principles.

Article 18: Non-Prohibited General Measures

Nothing in this Agreement shall prevent the implementation by either Party of measures it deems necessary in order to:

- (a) maintain public order;
- (b) protect its own national interests, including its essential security interests;

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, some with asterisks.

(c) fulfil its obligations with respect to the maintenance or restoration of peace and security;

(d) protect human, animal and plant life or health;

(e) protect and preserve the environment, including living and non-living natural resources;

(f) protect national treasures or monuments having artistic, cultural, historical and archaeological value.



PART II: DISPUTE SETTLEMENT

Section A: Settlement of Disputes concerning the Interpretation or Implementation of this Agreement

Article 19: Procedure for the Settlement of Disputes concerning the Interpretation or Implementation of this Agreement

1. The Parties will seek to settle any dispute that may arise between them concerning the interpretation or implementation of this Agreement through amicable consultations.
2. If any such dispute cannot be settled as provided for under paragraph 1 within six months of the date one of the Parties requests in writing an amicable solution, the dispute may be submitted to an ad hoc Arbitral Tribunal on the request of either Party. The UNCITRAL Arbitration Rules shall be applicable except as otherwise provided in this Agreement or agreed by the Parties.
3. The arbitration proceedings shall be administered by the PCA, unless the Parties agree otherwise.
4. The Arbitral Tribunal shall take decisions by a majority vote and its award shall be binding. The Parties shall bear the costs of arbitration in equal proportions.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures]

Section B: Settlement of Disputes between a Party and an Investor of the other Party

Article 20: Consultations and Negotiation



1. In case a dispute related to an investment arises, to the extent possible, will be settled amicably through consultation and negotiation which it may include the utilization of non-binding proceedings, such as mediation and conciliation
2. Consultations will be held for a minimum period of five months from the receipt by the respondent of a request for consultations pursuant to paragraph 4 of this Article.
3. Unless otherwise agreed, consultations will be held in the territory of the host Party.
4. The investor seeking consultations will submit a written request for consultation, specifying:
 - (a) the name and address of the investor and, where the claim is made on behalf of an enterprise, the name, address and place of incorporation of the enterprise;
 - (b) the provision of this Agreement alleged to have been breached and any other applicable provisions;
 - (c) the factual and legal basis for the claim;
 - (d) the relief sought and the approximate amount of damages claimed; and
 - (e) the evidence proving its condition of investor of the other Party and the existence of an investment.
5. The mediator will be appointed by agreement of the disputing parties. The disputing parties may also request that the Chairman of the ICSID Administrative Council or the Secretary General of the PCA appoint the mediator.
6. In the event of failure by an investor to submit a claim under Article 21 (Submission of a Claim to Arbitration by an investor of a Party on its own behalf or on behalf of an enterprise) within one year from the submission of a request for consultations, the claimant shall be deemed to have withdrawn their request for consultations and shall be barred from submitting a claim under this Section with regard to the same measures. Said period may be extended by mutual agreement.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'AC' and 'G'.



7. For greater certainty, the commencement of consultations and negotiations under this Article shall not be interpreted as recognition of the jurisdiction of any Arbitral Tribunal which may be constituted at a future time, in accordance with this Section.

Article 21: Submission of a claim to arbitration by an investor of a Party on its own behalf or on behalf of an enterprise

1. After at least six months have elapsed from the receipt of a written request for consultations under Article 20 (Consultations and Negotiation), the investor of the other Party:

(a) may submit a claim to arbitration on its own behalf, in accordance with this Section, stating:

(i) that the relevant disputing party has breached an obligation set forth in Part I (Substantive Provisions) with regard to the management, conduct, operation and sale or other form of disposition of an investment; or

(ii) that the claimant has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, that breach.

(b) may submit a claim to arbitration on behalf of an enterprise of the respondent with the status of legal person owned by the claimant or directly or indirectly controlled by the claimant, in accordance with this Section, stating:

(i) that the relevant disputing party has breached an obligation set forth in Part I (Substantive Provisions), except for Article 12 (Investment and Environmental, Health and Other Regulatory Objectives) and Article 17 (Corporate Social Responsibility), with regard to the management, conduct, operation and sale or other form of disposition of an investment; or

(ii) that the enterprise has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, that breach.

2. Pursuant to the provisions of paragraph 1, the claimant and the respondent may agree to submit their claim to:

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'AG' and 'S'.



- (a) an Arbitral Tribunal constituted under the ICSID Convention, provided that both Parties are parties to the ICSID Convention; or
- (b) an Arbitral Tribunal constituted under the UNCITRAL Arbitration Rules, which shall be administered by the PCA; or
- (c) an ad hoc Arbitral Tribunal.

3. In the event that the claimant and the respondent cannot reach an agreement on one of the above procedures as per paragraph 2 of this Article, either of them may submit the claim to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules.

4. The applicable arbitration rules shall be: in the case of paragraph 2 (a), the ICSID Convention Arbitration Rules; in the case of paragraph 2 (b), the UNCITRAL Arbitration Rules; and in the case of paragraph 2 (c), the arbitration rules chosen by the disputing parties by mutual agreement. The applicable rules shall govern the arbitration except to the extent modified in this Section or by agreement of the disputing parties.

5. For greater certainty, a dispute may be settled amicably at any time, including after the claim has been submitted to arbitration under this Article.

6. The investor seeking arbitration will submit a written request for arbitration in accordance with Article 42, specifying:

- (a) the name and address of the investor and, where the claim is made on behalf of an enterprise, the name, address and place of incorporation of the enterprise;
- (b) the provision of this Agreement alleged to have been breached and any other applicable provisions;
- (c) the factual and legal basis for the claim; and
- (d) the relief sought and the approximate amount of damages claimed.
- (e) the evidence proving its condition of investor of the other Party and the existence of an investment.

7. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, no claim may be submitted to arbitration if more than three years have elapsed from the date on which the claimant first acquired, or should have first acquired, knowledge of the breach alleged under paragraph 1.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures and scribbles]



Article 22: Conditions for the Submission of a Claim to Arbitration

1. Either on its own behalf or representing an enterprise of the respondent with the status of legal person owned by the claimant or directly or indirectly controlled by the claimant, the claimant may only submit a claim to arbitration under this Section provided that:

(a) the claimant consents to submit to arbitration in accordance with the procedures set forth in this Agreement; and

(b) the claimant and the legal person (if the claim refers to a loss or damage to an interest in an enterprise of the other Party with the status of legal person owned by the investor or directly or indirectly controlled by the investor) waive their right to initiate or pursue any proceedings before an administrative or judicial court under the laws of either Party or other dispute settlement mechanisms with regard to the measure taken by a disputing party allegedly in breach of the provisions of Part I (Substantive Provisions).

2. The consent and waiver required under this Article shall be provided in writing, delivered to the respondent, and included in the submission of the claim to arbitration.

Article 23: Consent of each Party to Arbitration

Each Party consents to submit a claim to arbitration under this Section in accordance with this Agreement.

Article 24: Third Party Funding

Third party funding is not permitted.

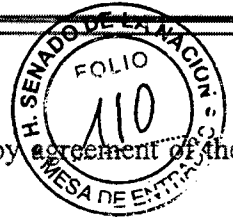
Article 25: Number of Arbitrators and Method of Appointment

1. Unless the disputing parties agree otherwise, the Arbitral Tribunal shall comprise three arbitrators, one arbitrator appointed by each of the disputing parties and the third,

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'A.L.' and 'S.'.



who shall act as the President of the Arbitral Tribunal, appointed by agreement of the disputing parties.

2. The arbitrators shall have adequate experience in public international law and international investment rules, or in the settlement of disputes arising from international investment agreements. They shall be impartial, independent, and not dependent on either Party or on the claimant or its attorneys, or receive instructions from any of them. The arbitrators shall not participate in the analysis of any dispute which may lead to a direct or indirect conflict of interest. They shall comply with the guidelines set forth in Part II, Section C of this Agreement (Provisions on the Conduct of Arbitrators), in addition to the International Bar Association Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, as well as with any supplementary rule on which the disputing parties may agree. Furthermore, at the time of appointment, the arbitrators will refrain from acting as advisers, as party-appointed experts, or as witnesses in any pending dispute on investments or under this Agreement or any other international agreement.

Article 26: Constitution of the Arbitral Tribunal if either Party Fails to Appoint an Arbitrator or the Disputing Parties Fail to Reach an Agreement on the Appointment of the Chairman of the Tribunal

- 1. Where either Party fails to appoint an arbitrator or the disputing parties fail to reach an agreement on the appointment of the President of the Arbitral Tribunal, within a period of 90 days from the date on which the claim is submitted to arbitration under this Section, the Tribunal shall be constituted in accordance with the provisions of the applicable Arbitration Rules under Article 21 (Submission of a claim to arbitration by an investor of a Party on its own behalf or on behalf of an enterprise) of this Agreement.
- 2. Nationals of the respondent and the Party of the claimant shall not be appointed as the President of the Arbitral Tribunal unless the disputing parties agree otherwise.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including 'AG' and a large signature.

Article 27: Consolidation of Proceedings



1. If two or more claims have been submitted separately to arbitration under Article 21 (Submission of a claim to arbitration by an investor of a Party on its own behalf or on behalf of an enterprise) and the claims raise a question of law or fact in common and arise out of the same events or circumstances, either disputing party may seek a consolidation order in accordance with the agreement of the other disputing party sought to be covered by the order or with the terms of paragraphs 2 through 10.

2. A disputing party that seeks a consolidation order under this Article shall deliver, in writing, a request to the ICSID Secretary-General or the Secretary General of the PCA, as applicable, and to the other disputing party sought to be covered by the order, and shall specify the following in the request:

(a) the name and address of the disputing party sought to be covered by the consolidation order;

(b) the nature of the consolidation order sought; and

(c) the grounds on which the order is sought.

3. Unless the ICSID Secretary-General or the Secretary General of the PCA, as applicable, finds within a period of 30 days from the date of receipt of a request under paragraph 2 that the request is manifestly unfounded, an Arbitral Tribunal shall be established under this Article.

4. Unless all the disputing parties sought to be covered by the consolidation order agree otherwise, an Arbitral Tribunal established under this Article shall comprise three arbitrators:

(a) one arbitrator appointed by agreement of the claimants;

(b) one arbitrator appointed by the respondent; and

(c) the President of the Arbitral Tribunal appointed by the ICSID Secretary-General or the Secretary General of the PCA, as applicable, provided that the President is not a national of the respondent or of a Party of any claimant.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures and initials]



5. If, within a period of 60 days from the date of receipt by the ICSID Secretary-General or the Secretary General of the PCA, as applicable, of a request made under paragraph 2, the respondent or the claimants fails to appoint an arbitrator in accordance with paragraph 4, the ICSID Secretary-General or the Secretary General of the PCA, as applicable, on request of any disputing party sought to be covered by the order, shall appoint, in his or her discretion, the arbitrator or arbitrators not yet appointed.

6. If an Arbitral Tribunal established under this Article is satisfied that two or more claims that have been submitted to arbitration under Article 21.1 (Submission of a claim to arbitration by an investor of a Party on its own behalf or on behalf of an enterprise) have a question of law or fact in common, and arise out of the same events or circumstances, the Arbitral Tribunal may, in the interest of fair and efficient resolution of the claims, and after hearing the disputing parties, by order:

(a) assume jurisdiction over, and hear and determine together, all or part of the claims;

(b) assume jurisdiction over, and hear and determine one or more of the claims, the determination of which it believes would assist in the resolution of the others; or

(c) instruct an Arbitral Tribunal previously constituted under Article 25 (Number of Arbitrators and Method of Appointment) to assume jurisdiction over, and hear and determine together, all or part of the claims, provided that:

(i) the latter Arbitral Tribunal, on request of a claimant that was not previously a disputing party before that Arbitral Tribunal, shall be reconstituted with its original members, except that the arbitrator for the claimants shall be appointed pursuant to paragraphs 4 (a) and 5; and

(ii) the latter Arbitral Tribunal shall decide whether any previous hearing shall be repeated.

7. If an Arbitral Tribunal has been constituted under this Article, a claimant that has submitted a claim to arbitration under Article 21.1 (Submission of a claim to arbitration by an investor of a Party on its own behalf or on behalf of an enterprise) and that has not been named in a request made under paragraph 2 may make a written request to the Arbitral Tribunal to be included in any order issued under paragraph 6. The request shall specify:

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'AG'.

- (a) the name and address of the claimant;
- (b) the nature of the consolidation order sought; and
- (c) the grounds on which the order is sought.



The claimant shall deliver a copy of their request to the Secretary-General of ICSID or the Secretary-General of the PCA, as appropriate.

8. An Arbitral Tribunal established under this Article shall conduct its proceedings in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules, except as modified by this Section.

9. An Arbitral Tribunal constituted under Article 25 (Number of Arbitrators and Method of Appointment) shall not have jurisdiction to decide on a claim, or part of a claim, over which an Arbitral Tribunal constituted or instructed under this Article has assumed jurisdiction, without prejudice to paragraph 6 (c).

10. At the request of a disputing party, an Arbitral Tribunal constituted under this Article, pending its decision under paragraph 6, may order that the proceedings of an Arbitral Tribunal constituted under Article 25 (Number of Arbitrators and Method of Appointment) be stayed, unless the latter Arbitral Tribunal has already adjourned its proceedings.

Article 28: Preliminary Objections

1. Any objection that the dispute is not within the jurisdiction or competence of the Arbitral Tribunal, is inadmissible, or manifestly lacks legal basis, shall be made as early as possible. A disputing party shall file the objection with the Arbitral Tribunal no later than the expiration of the time limit fixed for the filing of the counter-memorial.
2. The Arbitral Tribunal may on its own initiative consider, at any stage of the proceeding, whether the dispute before it is within its jurisdiction or competence.
3. Upon the formal raising of an objection relating to the dispute, the Arbitral Tribunal decides to suspend the proceeding on the merits. The President of the Arbitral Tribunal, after consultation with its other members, shall fix a time limit within which the disputing parties may file observations on the objection.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials "AG" and "b".



- 4. The Arbitral Tribunal shall decide whether or not the further procedures relating to the objection made pursuant to paragraph 1 shall be oral. If the Arbitral Tribunal overrules the objection or joins it to the merits, it shall once more fix time limits for the further procedures. Upon submission of its counter-memorial, or at a later stage of the proceedings, if the Arbitral Tribunal decides that, under the circumstances, the delay is justified, the respondent may submit a counter-claim directly related with the dispute, provided that the disputing party shall specify precisely the basis for the counter-claim.
- 5. If the Arbitral Tribunal decides that the dispute is not within its jurisdiction or competence, or that all claims are manifestly without legal merit, it shall render an award to that effect.

Article 29: Place of the Arbitration Proceedings

The disputing parties may agree on the legal place of any arbitration under the arbitration rules applicable in accordance with Article 21 (Submission of a claim to arbitration by an investor of a Party on its own behalf or on behalf of an enterprise). If the disputing parties fail to reach an agreement and have chosen not to apply the ICSID Arbitration Rules, the Arbitral Tribunal shall, in accordance with the applicable arbitration rules, determine its seat to be The Hague.

Article 30: Governing Law

- 1. The Arbitral Tribunal shall decide a dispute in accordance with this Agreement, and shall apply the law of the State Party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.
- 2. An interpretation jointly formulated and agreed upon by the State Parties with regard to any provision of this Agreement shall be binding on any Arbitral Tribunal established thereunder.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials.

Article 31: Expert Reports



Without prejudice to the appointment of other kinds of experts when authorized by applicable arbitration rules, the Arbitral Tribunal, on request of a disputing party or, unless the disputing parties disapprove, on its own initiative, may appoint one or more experts to report to it in writing on any factual issue concerning environmental, health, safety or other scientific matters raised by a disputing party in a proceeding, subject to the terms and conditions agreed upon by the disputing parties.

Article 32: Interim Protection Measures

1. An Arbitral Tribunal may, at the request of a disputing party and where the circumstances of the case so require, order an interim measure of protection to preserve the rights of a disputing party, or to ensure that the jurisdiction of the Arbitral Tribunal is made fully effective, including an order to preserve evidence in the possession or control of a disputing party or to protect the jurisdiction of the Arbitral Tribunal.

2. The request must specify the rights to be protected, the measures requested and the circumstances requiring the implementation of such measures. In addition, the disputing party requesting an interim measure must demonstrate the following before the Arbitral Tribunal:

(a) failure to grant the interim measure would probably result in harm which cannot be redressed through the payment of compensation and which is notoriously more serious than the harm that may be inflicted upon the party affected by the interim measure if adopted; and

(b) it is reasonably probable that its claim on the merits will succeed. The decision of the Arbitral Tribunal on such probability will not constitute a prior judgement in connection with any subsequent determination the Arbitral Tribunal may adopt.

3. The Arbitral Tribunal will only issue interim measures, or amend or revoke previously issued measures, after allowing each party to submit its observations.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'AG' and 'S'.

4. The Arbitral Tribunal may require the disputing party requesting an interim measure to post an appropriate bond with respect to the requested measure.



Article 33: Awards

1. When an Arbitral Tribunal makes a final award, the Arbitral Tribunal may only award, either separately or in combination:

- (a) monetary damages and any applicable interest; and
- (b) restitution of property, in which case the award shall provide that the respondent may pay monetary damages and any applicable interest in lieu of restitution.

The Arbitral Tribunal may also award legal costs in accordance with this Section and applicable arbitration rules.

2. In accordance with paragraph 1, where the claim is made by an investor on behalf of an enterprise:

- (a) an award of restitution of property shall provide that restitution be made to the enterprise;
- (b) an award of monetary damages and any applicable interest shall provide that the sum be paid to the enterprise.

3. An Arbitral Tribunal may not order a Party to pay punitive damages.

4. An award issued by an Arbitral Tribunal shall have no binding force except between the disputing parties and only with respect to the particular case.

5. A disputing party shall not seek enforcement of a final award until:

- (a) in the case of a final award made under the ICSID Convention:
 - (i) 120 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing party has requested the revision under Article 51 of the ICSID Convention or annulment of the award under Article 52 of the ICSID Convention; or
 - (ii) revision or annulment proceedings have been completed; and
- (b) in the case of a final award under the UNCITRAL Arbitration Rules;

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures and initials]



(i) 90 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing party has requested the revision, revocation or annulment of the award; or

(ii) a court has dismissed or allowed an application to revise, set aside, or annul the award and there is no further appeal.

6. Each Party shall provide for the enforcement of an award in its territory.

7. A claim that is submitted to arbitration under this Section shall be considered to arise out of a commercial relationship or transaction, for the purposes of Article I of the New York Convention.

Section C: Provisions on the Conduct of Arbitrators

Article 34: Conduct of Arbitrators

1. The provisions of this Article shall apply to the procedures conducted in accordance with Sections A and B. In the event that the provisions of this Section are not consistent with the International Bar Association Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, the former shall prevail.

2. Members of Arbitral Tribunals must be independent and impartial, and must avoid any direct or indirect conflicts of interest. They must also observe the confidentiality of proceedings.

Article 35: Obligations related to the disclosure of data

1. Before accepting their appointment, each arbitrator must disclose the existence of any interest, relationship or matter that could reasonably be expected to be known and affect or raise justifiable doubts as regards the independence or impartiality of the arbitrator, including public statements or personal opinions on issues related to the dispute and any professional relationship with any person or organization that may have any interest in the case.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials.



2. The obligation to disclose data shall be permanent and binds arbitrators to disclose any interest, relationship or matter that may arise during any of the stages of the proceedings.

Article 36: Duties of Arbitrators

- 1. Upon being appointed, arbitrators must fully and promptly fulfil their obligations during the proceedings. Such duties must be fulfilled fairly and diligently.
- 2. Arbitrators shall limit their analysis to the issues arising from the proceedings and that are required to issue a decision.
- 3. Arbitrators may not discuss any aspect of the dispute to be settled with either disputing party in the absence of the other.

Article 37: Independence and impartiality of Arbitrators

- 1. Arbitrators shall:
 - (a) fulfil their duties without accepting or requesting instructions from any international, governmental or non-governmental institution, or from any private source,
 - (b) remain independent and unbiased, without being affected by personal interests, political considerations or the public opinion,
 - (c) avoid starting a relationship or acquiring any financial interest that may affect their impartiality or that may reasonably create an appearance of impartiality.
- 2. Arbitrators may not:
 - (a) directly or indirectly assume obligations or accept benefits that may in any way interfere with the proper fulfilment of their obligations or allow for the possibility of justifiably doubting such fulfilment,
 - (b) use their position in the Arbitral Tribunal to obtain personal or private benefits of any kind, or

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials.

(c) allow their conduct or decisions to be affected by financial, business, professional, family or social relationships or responsibilities.

Article 38: Obligations of those having served as Arbitrators

Any person who has served as arbitrator must avoid any advantages resulting from the arbitral decisions or awards adopted by the Arbitral Tribunal.

Article 39: Confidentiality

1. No arbitrator or former arbitrator may at any time disclose or use non-public information about proceedings, or information obtained during any proceedings, except for the purposes of such proceedings, and in no case may any arbitrator or former arbitrator disclose or use such information to obtain benefits for themselves or third parties, or for the purpose of unduly affecting third party interests.
2. Arbitrators and those who have served as arbitrators shall not disclose at any time any deliberations of an Arbitral Tribunal as the opinion of an arbitrator.

Article 40: Commitment

Immediately after being appointed and before accepting their appointment, arbitrators must submit the following commitment:

"I hereby accept my appointment as arbitrator, in accordance with paragraph [] I declare that I have no interest in the dispute, and that no other reason can prevent me from serving as a member of the Arbitral Tribunal constituted to settle the dispute between the Parties.

I undertake to perform this duty independently, impartially and with integrity, avoiding any direct or indirect conflict of interest, refraining from accepting suggestions or

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures]



impositions from third parties, and not receiving any compensation related to my service, except for those established in this Agreement.

I undertake to disclose, in this commitment and in the future, any information that may affect my independence or impartiality, or that may give rise to justifiable doubts about the integrity and impartiality of this mechanism for the settlement of disputes.

I undertake to fulfil my confidentiality obligations with respect to the dispute settlement proceedings and the content of my vote."

Article 41: Challenge of Arbitrators

1. An arbitrator may be challenged on the basis of a failure to meet the requirements for appointment as arbitrator, supervening incapacity or inability to perform their duties, or on the basis of the existence of circumstances that raise justifiable doubts regarding their impartiality or independence.
2. A disputing party may not challenge an arbitrator it has appointed unless the reasons for such challenge become known after the appointment.
3. A disputing party wishing to challenge an arbitrator shall notify its decision within 45 days from the date it was notified of the appointment of the challenged arbitrator, or within a term of 45 days from the date the disputing party learns of any circumstances that may arise after the appointment.
4. The challenge must be founded and informed to the other party, the challenged arbitrator and the other members of the Arbitral Tribunal.
5. The disputing party notifying the decision to challenge an arbitrator may expand the reasons for the challenge after the relevant notice is served.
6. Where an arbitrator has been challenged by a party, the other party may accept the challenge. After being challenged, an arbitrator may also resign. Neither case shall imply acceptance of the validity of the reasons for the challenge.
7. If all parties fail to express their conformity with the challenge or the challenges arbitrator fails to resign within 30 days from the date of notice of such challenge, the

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



disputing party that proposed the challenge may choose to maintain it. In such case, within 30 days as from the date of notice of the challenge, such disputing party may request the President of the International Court of Justice to adopt a founded decision on the challenge.

8. If the President of the International Court of Justice admits the challenge, the disputing party shall appoint a new arbitrator and, in the event an arbitrator has to be replaced during the proceedings, a substitute arbitrator will be appointed.

9. Proceedings will be suspended until the disputing parties grant their consent to the challenge, the challenged arbitrator resigns, or a decision is issued on the proposed challenge.

Part III: General and Final Provisions

Article 42: General Provisions

Time when the claim will be considered submitted to arbitration proceedings

A claim will be deemed to be submitted to arbitration under the terms hereof where:

- (a) a request for arbitration under Article 36(1) of the ICSID Convention has been recorded by the Secretary-General, in accordance with paragraph 3 thereof; or
- (b) an arbitration notice under the UNCITRAL Arbitration Rules has been received by the disputing party.

Service of Documents

- 1. Documents must be served at the place specified by each Party. Each Party shall notify and immediately disclose any change in the place specified in this Part.
- 2. The place for service of the notice of intent to submit a dispute to arbitration and of other documents related to the settlement of disputes under Section B shall be:

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'AG' and 'G'.



(a) For the Argentine Republic:

Ministry of Foreign Affairs and Worship
Esmeralda 1212,
Autonomous City of Buenos Aires, Argentine Republic; and

Argentine Treasury Attorney General's Office
Posadas 1641,
Autonomous City of Buenos Aires, Argentine Republic;

or its successors.

(b) For the United Arab Emirates:

Ministry of Finance

Al Falah Street 9

P.O. Box 433

Abu Dhabi, United Arab Emirates

or its successor.

Article 43: Entry into force

1. This Agreement and any amendments shall enter into force on the date of receipt of the last notice sent in writing by either of the Parties in order to inform, through diplomatic channels, about the completion of the internal legal procedures for the entry into force of this Agreement and any amendments.
2. This Agreement may be amended by means of a written agreement between the two Parties.

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE



[Handwritten signatures and initials]



Article 44: Duration and Termination

1. This Agreement shall remain in force for a period of 10 years. After that period, the Agreement shall remain in force unless either Party notifies the other in writing of its intention to denounce it. The notice of termination shall enter into force one year after it is received by the other Party.

2. With respect to the investments made before the date of the notice of termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall remain in force for a term of two years starting on the date of its denunciation.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have executed this Agreement.

This Agreement has been done and signed in Abu Dhabi, on 16 April 2018, in two originals in the Spanish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In the event of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR
THE ARGENTINE REPUBLIC**

**FOR
THE UNITED ARAB EMIRATES**

INLEG-2019-67803238-APN-SECCYPE#MRE





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Documentación de Convenios de Obra

Número:

Referencia: Anexos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 57 pagina/s.